

VENEZUELA

El secuestro del presidente Nicolas Maduro y el fin de América Latina y el Caribe como Zona de Paz

Enero 2025 - Enero 2026

nodal 

ÍNDICE

- 3 INTRODUCCIÓN
- 4 MAPA DE RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS
- 5 LA ASUNCIÓN PRESIDENCIAL Y EL GOBIERNO PARALELO QUE NO FUE
- 7 UN AÑO EN PERMANENTE EJERCICIO DEMOCRÁTICO
- 8 INFOGRAFÍA: ELECCIONES 2025 EN VENEZUELA
- 9 POLÍTICAS DE REPATRIACIÓN Y DDHH COMO RESPUESTA A MEDIDAS ANTI INMIGRANTES
- 10 ASEDIO MEDIANTE GUERRA ECONÓMICA Y POLÍTICAS ANTIBLOQUEO
- 15 RESPUESTA POPULAR Y SOBERANA A UNA OFENSIVA MILITAR Y MEDIÁTICA
- 12 ESCALADA FINAL, PIRATERÍA PETROLERA Y CERCO TOTAL
- 17 ENTREVISTA DE FIN DE AÑO A NICOLÁS MADURO- Por Ignacio Ramonet
- 19 SECUESTRO PRESIDENCIAL Y RUPTURA ABIERTA DEL ORDEN INTERNACIONAL
- 25 PALABRAS FINALES: EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LAS POTENCIALIDADES DEL PROCESO ANTIIMPERIALISTA BOLIVARIANO

INTRODUCCIÓN

El presente Informe analiza los principales acontecimientos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela a lo largo de 2025 y los primeros días de enero de 2026, dando cuenta de la manera en que el recrudecimiento de la ofensiva en múltiples dimensiones, desplegada por el gobierno de Estados Unidos y una red de actores del poder concentrado a nivel mundial, preparó el terreno para lo que será recordado como un punto de inflexión en la historia latinoamericana y mundial: un ataque armado y el secuestro del Jefe de Estado del país.

La madrugada del 3 de enero de 2026 las Fuerzas Armadas de EEUU, ejecutaron ataques sobre infraestructura civil y militar en Caracas y otras regiones del país y aprehendieron de manera ilegal al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. El hecho, en el que, tras un combate fallecieron más de 100 personas, resultando también heridas miembros de las fuerzas estadounidenses.

Durante años, el poder angloamericano, en general, y el trumpismo, en particular, ensayaron el repertorio habitual del dominio imperial contemporáneo: medidas coercitivas unilaterales, asfixia financiera, guerra económica, operaciones psicológicas, “reconocimientos” selectivos, y dispositivos de oposición tercerizada (“Grupo de Lima”). Pero el chavismo no colapsó. No se fracturó por el hambre inducido ni fue derrotado por una oposición aliada a la socialdemocracia europea, la USAID, la NED y el ecosistema de agencias y fundaciones que lubrican el injerencismo intervencionista.

La lectura que empezó a emerger en la segunda administración de Donald Trump de la Casa Blanca empezó a ser otra; si no cae por desgaste prolongado, se lo intenta por “extracción directa”, buscando forzar una crisis en la superestructura política bolivariana, para así extorsionar una “negociación”.

En la larga historia de agresiones que tiene como hitos recientes los intentos fallidos de golpe electoral, en julio de 2024, y de encumbrar un intento de gobierno paralelo en enero de 2025, la ofensiva contra Venezuela aumentó de manera progresiva y simultánea en múltiples dimensiones: mediática, política, económica, diplomática y militar. La difusión sistemática de noticias falsas, las campañas de desinformación, la judicialización extraterritorial y la instrumentalización de organismos internacionales funcionaron como dispositivos orientados a erosionar la legitimidad del Estado venezolano, justificar medidas coercitivas unilaterales y preparar el terreno para una escalada militar abierta. Sin embargo, a esta ofensiva imperialista permanente se opuso una respuesta popular, producto de un proceso de años de organización política de masas, producción de poder popular y lucha social en defensa del derecho a su autodeterminación.

Frente a este escenario, el presente informe asume como tarea central el combate a la desinformación mediante el análisis riguroso de los hechos, la contextualización geopolítica y la sistematización de datos verificables. Esta dimensión resulta inseparable de cualquier proyecto político-comunicacional comprometido con la autodeterminación de los pueblos, en un tiempo histórico en el que la democracia liberal evidencia crecientes límites para dar respuestas a las mayorías populares y es utilizada, en no pocos casos, como coartada discursiva para legitimar prácticas de injerencia y dominación imperial.

En este marco regional y global se inscriben los acontecimientos que se desarrollan a lo largo del informe.

MAPA RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, estimadas en aproximadamente 303 mil millones de barriles.

17%
PETRÓLEO
MUNDIAL

198
BILLONES DE
PIES CÚBICOS
DE GAS



PRINCIPALES CONSUMIDORES DE PETRÓLEO



Estados Unidos: 19.78 millones bpd.



China: 14.01 millones bpd.



India: 4.92 millones bpd.



Japón: 3.74 millones bpd.



Rusia: 3.59 millones bpd.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2023.

Gráfico de elaboración propia

El control del petróleo venezolano resulta estratégico para la reconfiguración global en curso, en un contexto en el que la nueva infraestructura digital y tecnológica demandará volúmenes crecientes de energía. En este marco, Estados Unidos ha explicitado en su Estrategia de Seguridad Nacional la intención de recuperar el dominio energético —en petróleo, gas y energía nuclear— como condición para abaratar los costos energéticos y avanzar en un proceso de reindustrialización, en abierta disputa con China por el predominio económico y tecnológico global.

LA ASUNCIÓN PRESIDENCIAL Y EL GOBIERNO PARALELO QUE NO FUE

El viernes 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro juramentó ante la Asamblea Nacional para un nuevo período presidencial, luego de haber resultado reelecto en una contienda con trece candidaturas, doce de ellas pertenecientes a distintos sectores de la oposición. Quedó por fuera del proceso electoral la fracción encabezada por María Corina Machado, que optó por sostener una estrategia de desconocimiento institucional y confrontación abierta.

En la previa de la toma de posesión, este sector intentó reeditar el esquema de gobierno paralelo ensayado en 2019. Sin embargo, a diferencia de aquel momento, la iniciativa evidenció un marcado desgaste político, tanto en el plano interno como en el internacional. La falta de respaldo efectivo y la pérdida de capacidad de convocatoria terminaron por vaciar de contenido una estrategia que ya no logró articular consensos ni generar escenarios de ruptura institucional.

En ese marco se inscribió la gira internacional iniciada el 6 de enero por Edmundo González Urrutia, con escalas en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. En Buenos Aires fue recibido por el presidente Javier Milei y por funcionarios de su gabinete; en Montevideo mantuvo encuentros con dirigentes de la oposición venezolana y recibió un apoyo más moderado por parte del gobierno saliente de Luis Lacalle Pou; y el 8 de enero se reunió con el entonces presidente estadounidense Joseph Biden. No obstante, estos gestos políticos no se tradujeron en un reconocimiento formal ni en una hoja de ruta concreta que permitiera disputar efectivamente la legitimidad del gobierno venezolano.



Manifestantes opositores el 9 de enero de 2025, en Av. Santa Fe en el Este de Caracas

El 9 de enero, en la antesala de la asunción presidencial, la Plataforma Unitaria Democrática convocó a una movilización encabezada por María Corina Machado. La jornada tuvo una concurrencia inferior a la esperada y derivó en una operación mediática que incluyó la difusión de versiones falsas sobre la supuesta detención de la dirigente opositora. En pocas horas, y tras haber generado una tendencia global en redes sociales, Machado reapareció en un video difundido por sus propios canales, en el que afirmó encontrarse “a salvo”, desactivando el relato previamente instalado.

Durante esas horas, redes sociales, plataformas digitales y medios alineados con la estrategia opositora difundieron denuncias de desapariciones, atentados y escenarios de violencia inminente que no se verificaron en los hechos. Este despliegue de desinformación terminó por erosionar aún más la credibilidad de la operación política, mientras la hipótesis de un ingreso forzado de González Urrutia al país para proclamarse presidente nunca se concretó.

El 10 de enero, Nicolás Maduro asumió formalmente el nuevo período presidencial, cerrando un ciclo de intentos de desestabilización que, lejos de consolidarse, evidenció el agotamiento de una estrategia basada en la construcción de ficciones institucionales sin anclaje territorial ni respaldo social suficiente.



UN AÑO EN PERMANENTE EJERCICIO DEMOCRÁTICO

A lo largo de 2025, Venezuela atravesó un calendario electoral de alta intensidad, marcado por la renovación de cargos ejecutivos y legislativos en un contexto regional signado por la inestabilidad política, la presión internacional y los intentos de deslegitimación institucional. Lejos de paralizar el funcionamiento democrático, este escenario reforzó la centralidad del voto y de los mecanismos de participación popular como pilares del sistema político venezolano.

En marzo se realizaron las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el marco del Gran Polo Patriótico, para la definición de candidaturas a gobernaciones, Asamblea Nacional y alcaldías. El 25 de mayo tuvieron lugar las elecciones regionales y legislativas, en las que se eligieron 24 gobernadores, 285 diputados nacionales y 260 legisladores regionales. Por primera vez, el proceso incluyó la participación electoral en la Guayana Esequiba, luego del referéndum realizado en 2023 que ratificó la soberanía venezolana sobre ese territorio.

En estos comicios, el Gran Polo Patriótico consolidó su hegemonía política, mientras que sectores opositores como Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia decidieron participar del proceso electoral. En contraste, la Plataforma Unitaria Democrática, encabezada por María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y Leopoldo López, llamó al boicot, profundizando sus tensiones internas y expulsando de sus instancias a las fuerzas que optaron por la vía electoral.

En julio, las elecciones municipales confirmaron la correlación de fuerzas resultante de los comicios regionales. El chavismo amplió su presencia territorial, pasando de gobernar 212 a 285 alcaldías, y recuperó ciudades estratégicas como Maracaibo, capital del estado Zulia, de alto peso político y económico.

Un capítulo central de este proceso fue la Consulta Popular Nacional de la Juventud, realizada de manera simultánea a las elecciones municipales. Más de 337.000 propuestas surgidas desde consejos comunales y comunas de todo el país fueron sometidas a votación, de las cuales 5.336 resultaron seleccionadas. Los proyectos priorizados abarcaron áreas clave como deporte, salud, educación, emprendimientos productivos y desarrollo tecnológico, consolidando una experiencia de democracia directa con fuerte anclaje territorial.

A estas instancias se sumaron, a lo largo del año, cuatro Consultas Populares nacionales destinadas a la selección de proyectos comunitarios a financiar por el Estado. Estos mecanismos de participación, sostenidos incluso en un contexto de bloqueo económico y hostigamiento externo, constituyen uno de los rasgos distintivos del modelo democrático venezolano y operan como respuesta concreta a las narrativas que buscan presentar al país como un Estado carente de legitimidad institucional.





ELECCIONES 2025 EN VENEZUELA



A continuación, ofrecemos un recuento de los procesos electorales que tuvieron lugar este 2025 en Venezuela.

01

2 de febrero

Primer Consulta Popular 2025
para la elección de proyectos
comunales a financiar por el Estado

02

15 de marzo

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dentro del Gran Polo Patriótico (GPP) realizó **elecciones primarias** para definir sus candidaturas a gobernaciones, Asamblea Nacional y alcaldías.

03

27 de abril

Segunda Consulta Popular 2025
para la elección de proyectos
comunales a financiar por el Estado

04

25 de mayo

**Elecciones regionales y
Parlamentarias**

El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPP) obtuvo 82% de los votos y ganó 23 de los 24 gobiernos estatales.

05

27 de abril

Elecciones Municipales
El GPP ganó más de 285 alcaldías.
Ese mismo día se realizó también
una Consulta Popular Nacional de
la Juventud.

06

23 de noviembre

Tercera Consulta Popular 2025
para la elección de proyectos
comunales a financiar por el Estado

Cuarta Consulta Popular 2025 para la
elección de proyectos comunales a
financiar por el Estado

POLÍTICAS DE REPATRIACIÓN Y DDHH COMO RESPUESTA A MEDIDAS ANTI INMIGRANTES

Otro de los ejes que colocó a Venezuela en el centro del escenario internacional durante 2025 fue la situación de 252 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, una instalación financiada por Estados Unidos y denunciada por organismos de DDHH y familiares por las condiciones inhumanas de detención, que incluyeron privación de alimentos, tratos degradantes y denuncias de torturas.

El presidente Nicolás Maduro denunció públicamente estos hechos y solicitó la mediación del Papa León XIV para lograr la liberación de 18 menores retenidos en Estados Unidos, mientras en Venezuela se desarrollaron movilizaciones y campañas de solidaridad que exigieron el cese de las detenciones arbitrarias. El 19 de julio, la repatriación a Caracas de los 252 migrantes recluidos en el CECOT marcó un punto de inflexión, como resultado de un acuerdo trilateral entre Venezuela, El Salvador y Estados Unidos.

El canciller Yván Gil calificó este operativo como una victoria diplomática frente al uso de la migración como herramienta de presión política y subrayó el doble estándar de Washington, que criminaliza la movilidad de ciudadanos venezolanos mientras sostiene un bloqueo económico y financiero que contribuye a las condiciones que luego utiliza como argumento para justificar políticas represivas.

En este contexto, el Estado venezolano profundizó el Plan Vuelta a la Patria bajo la dirección de Delcy Rodríguez como política estructural de protección de derechos humanos y de soberanía nacional. Solo durante el primer semestre de 2025, el programa permitió la repatriación de 6.752 venezolanos y venezolanas, entre ellos 979 niños y niñas, consolidándose como una respuesta concreta frente a las políticas antiinmigrantes impulsadas desde Estados Unidos y sus aliados regionales.

La articulación entre denuncia internacional, movilización popular y políticas públicas de repatriación permitió al gobierno venezolano disputar el sentido común en torno a los derechos humanos, evidenciando la contradicción entre el discurso humanitario utilizado para justificar medidas coercitivas y la práctica sistemática de violaciones a los derechos fundamentales de la población migrante.



ASEDIO MEDIANTE GUERRA ECONÓMICA Y POLÍTICAS ANTIBLOQUEO

El asedio contra la República Bolivariana de Venezuela se profundizó a lo largo de 2025, mediante la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales, que continuaron operando como uno de los principales instrumentos de presión política, económica y financiera por parte de Estados Unidos y sus aliados. Estas medidas, lejos de constituir acciones aisladas, formaron parte de una estrategia integral orientada a debilitar las capacidades del Estado venezolano, erosionar las condiciones de vida de la población y condicionar el rumbo político del país.

Durante los primeros meses del año, el Observatorio Venezolano Antibloqueo registró nuevas medidas coercitivas unilaterales y disposiciones restrictivas impulsadas por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y El Salvador, así como por actores del sistema financiero internacional. En la previa de la toma de posesión presidencial, el Departamento del Tesoro estadounidense amplió las medidas individuales contra funcionarios venezolanos, acusándolos de respaldar lo que Washington calificó como una “reclamación ilegítima del poder”, reforzando así la judicialización extraterritorial como mecanismo de presión política.

En ese mismo marco, el reconocimiento unilateral de Edmundo González Urrutia como “presidente legítimo” por parte de Estados Unidos fue utilizado como fundamento para nuevas acciones de congelamiento de activos estatales en el exterior, profundizando el cerco financiero. A ello se sumó, a fines de marzo, la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que impuso aranceles secundarios del 25 % a los países que compraran o comercializaran petróleo y gas venezolanos, ampliando el alcance extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales.

Frente a esta escalada, el presidente Nicolás Maduro decretó en abril la Emergencia Económica, amparado en las facultades constitucionales, con el objetivo de proteger la economía nacional y garantizar el abastecimiento en un contexto de guerra arancelaria y comercial. En paralelo, el gobierno bolivariano avanzó en un plan estratégico de transformación del modelo económico, orientado a fortalecer la autosuficiencia productiva, la capacidad exportadora y el reimpulso del Motor Hidrocarburos.

A fines de marzo comenzó a implementarse la fórmula PAE (Produce, Abastece y Exporta en Venezuela), concebida como una herramienta para dinamizar sectores estratégicos como el hierro, el acero, el aluminio y la minería. En este marco, el sector minero se consolidó como un componente clave de la reactivación económica, con un aporte significativo al crecimiento del producto interno bruto.

En el plano internacional, Venezuela profundizó su política de alianzas estratégicas como parte de su respuesta al cerco económico. En mayo, el presidente Nicolás Maduro visitó Moscú en el marco de la conmemoración del 80° aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre el nazismo, oportunidad en la que se firmó un Acuerdo de Asociación y Cooperación Estratégica por diez años. El tratado contempla el desarrollo de una infraestructura financiera independiente, inversiones conjuntas en petróleo, gas y minería, la ampliación de rutas aéreas y el fortalecimiento de la cooperación en áreas como salud, ciencia, tecnología, seguridad y defensa.

La revocación de licencias petroleras y limitación a Chevron -empresa norteamericana produciendo en Venezuela-, dispuesta por Estados Unidos en mayo, impactaron negativamente en la producción de crudo. No obstante, Venezuela intensificó su estrategia de diversificación energética mediante acuerdos con Rusia, China, Turquía, India y Vietnam, reduciendo la dependencia de los circuitos occidentales.

Hacia el último trimestre del año, las medidas coercitivas unilaterales se articularon de manera directa con el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe. El bloqueo comercial fue utilizado como argumento para la interceptación de buques petroleros venezolanos durante diciembre, mientras se extendieron nuevas medidas individuales contra integrantes del entorno familiar del presidente Maduro y se anunciaron acciones conjuntas contra Venezuela e Irán por el comercio de drones.

Este entramado de presiones económicas, financieras y comerciales confirma que el bloqueo contra Venezuela que lleva más de una década, constituye una política de guerra económica sostenida, inseparable de la ofensiva militar y mediática desplegada durante 2025, y orientada a condicionar la soberanía del país en un contexto de reconfiguración del orden geopolítico global.



Fuente: elaboración propia en base a los datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo, Diciembre 2025

RESPUESTA POPULAR Y SOBERANA A UNA OFENSIVA MILITAR Y MEDIÁTICA

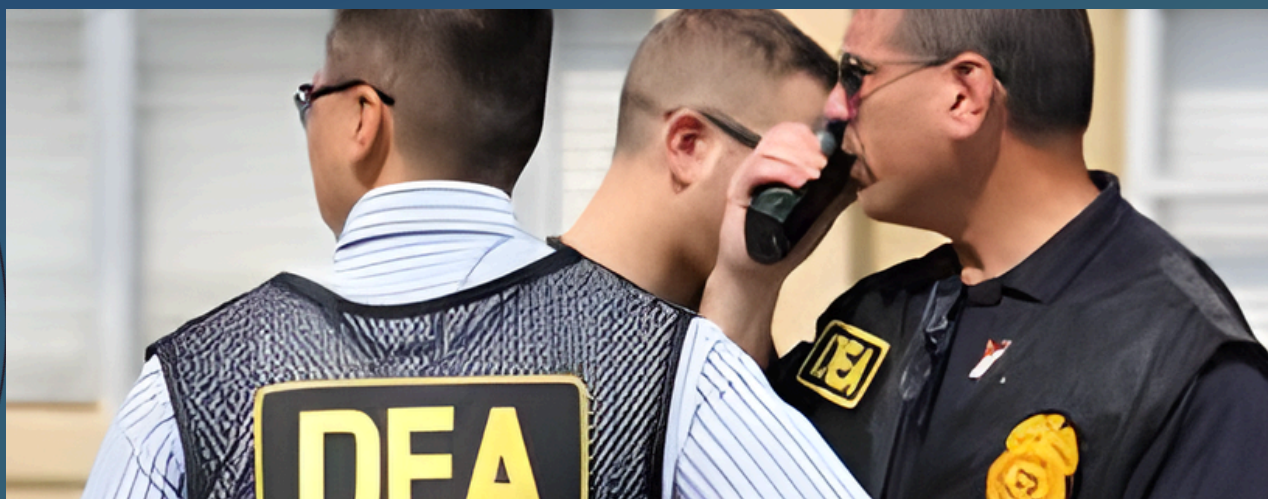
La ofensiva contra Venezuela combinó operaciones judiciales, campañas mediáticas y acciones militares con el objetivo de construir un clima de legitimación para una intervención directa. En este marco, la acusación reiterada de “narcoterrorismo” funcionó como pieza central de una estrategia de guerra híbrida orientada a erosionar la soberanía venezolana y preparar el terreno para una escalada armada.

Durante el mes de febrero, el gobierno venezolano denunció la utilización de información falsa en torno a un supuesto ataque contra tropas guyanesas en la Guayana Esequiba, señalando que se trató de una maniobra destinada a manipular la opinión pública internacional y encubrir violaciones al derecho internacional por parte de Guyana.

En paralelo, la Asamblea Nacional repudió el financiamiento externo recibido por sectores de la oposición extrema, revelado tras la difusión de datos sobre el accionar de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y advirtió sobre planes que incluían la construcción de narrativas mediáticas para justificar una intervención militar.

En esta fase preparatoria, la narrativa del llamado “Cartel de los Soles” fue reactivada por el gobierno estadounidense como eje de criminalización del Estado venezolano. En 2025, Donald Trump designó formalmente a este supuesto entramado como organización terrorista global y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la “captura” del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, memorandos desclasificados y documentos de agencias de inteligencia estadounidenses reconocieron que no existen pruebas que vinculen al gobierno venezolano con estructuras de narcotráfico, contradicción que también fue señalada por informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ratificaron que Venezuela no es país productor ni corredor principal de drogas ilícitas.

Además en el renovado documento de acusación, publicado por la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, horas después del secuestro, el Departamento de Justicia abandonó la referencia al Cartel de los Soles como un grupo criminal. En sus 25 páginas, tampoco hace referencia a él como “organización terrorista”, sino como un “sistema de clientelismo” y “cultura de corrupción”.



A partir del segundo semestre del año, esta construcción discursiva se articuló con una intensificación de las operaciones militares en el Mar Caribe. En agosto, Trump firmó una directiva secreta que habilitó al Pentágono a lanzar acciones armadas contra presuntos cárteles en América Latina, y pocos días después se ordenó el despliegue de buques y aeronaves en el sur del Caribe. En simultáneo, el gobierno venezolano lanzó la campaña nacional “Yo me alisto”, convocando a millones de milicianos a ejercicios de preparación cívico-militar-policial como señal de cohesión frente a la amenaza externa.

También organizaciones, movimientos sociales e instituciones expresaron su respaldo a la defensa soberana de la República Bolivariana de Venezuela, como los capítulos de la Internacional Antifascista en Bolivia, Costa Rica, Argentina y los centros venezolanos de CLACSO, la Asociación Americana de Juristas y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, integrado por más de una veintena de países. Además, el 30 de agosto se realizaron movilizaciones en 80 países y 105 ciudades en una jornada internacional de apoyo a Venezuela.

Pero, en consonancia con la narrativa de EEUU, las autoridades y cancillerías de Argentina, Ecuador, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago declararon al “Cartel de los Soles” como “organización criminal trasnacional”.

En paralelo al incremento de las presiones externas, Venezuela profundizó la alianza estratégica con China. El 18 de septiembre, ambos gobiernos ratificaron la Asociación Estratégica “A Toda Prueba y Todo Tiempo”, reforzando la cooperación en defensa, energía, tecnología y comunicación estratégica.

Pocos días después, en el Foro de Xiangshan en Beijing, representantes de América Latina y el Sudeste Asiático respaldaron el principio de no intervención y criticaron la presencia militar estadounidense en la región. La agenda bilateral continuó el 8 de octubre, cuando Maduro recibió al embajador chino Lan Hu para avanzar en proyectos de infraestructura y seguridad. La centralidad de este vínculo se hizo evidente en un semestre donde la disputa global entre Washington y Beijing tuvo su expresión más intensa en el Caribe.



El 12 de septiembre marcó un punto de inflexión, cuando el destructor estadounidense USS Jason Dunham atacó el pesquero venezolano Carmen Rosa. Caracas calificó el hecho como una agresión militar extrajudicial y activó de inmediato el Plan Independencia 200, movilizando a la Milicia Bolivariana, las Zonas Operativas de Defensa Integral y las estructuras del poder popular. La respuesta internacional fue amplia: países del ALBA-TCP, gobiernos de América Latina y organizaciones sociales de diversas regiones repudiaron el ataque y exigieron el retiro de las fuerzas estadounidenses del Caribe.

En las semanas siguientes se sucedieron sobrevuelos, intercepciones de embarcaciones y nuevas acusaciones mediáticas destinadas a sostener la narrativa de narcotráfico. Frente a ello, autoridades venezolanas denunciaron una operación psicológica orientada a justificar una intervención mayor, mientras voceros regionales como los presidentes de México, Colombia y Brasil advirtieron sobre el riesgo de una escalada bélica de alcance continental. China y Rusia también expresaron su oposición a cualquier acción que violara la Carta de las Naciones Unidas y reafirmaron su respaldo a la soberanía venezolana.

La ofensiva militar fue acompañada por una respuesta popular sostenida. Durante septiembre y octubre se realizaron movilizaciones masivas en todo el país, destacándose la marcha de la Milicia Bolivariana, la movilización lacustre en el Lago de Maracaibo y la jornada nacional bajo la consigna “Ganemos la paz, defendamos la vida”. Estas expresiones de organización territorial se articularon con acciones diplomáticas en foros internacionales, donde Venezuela denunció la militarización del Caribe como una amenaza a la estabilidad regional y al principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En este contexto, la respuesta venezolana combinó defensa territorial, movilización popular y ofensiva diplomática, evidenciando que la escalada militar y mediática no logró fracturar la cohesión política y social ni aislar al país, sino que reforzó los mecanismos de defensa de la autodeterminación frente a una estrategia de agresión total.



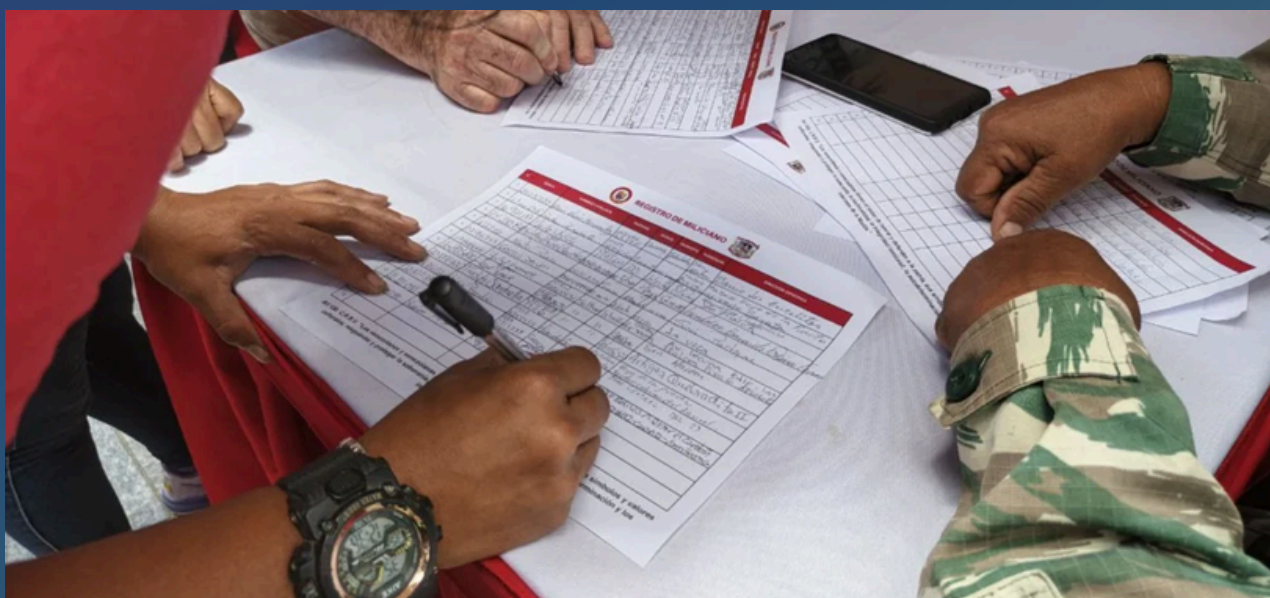
ESCALADA FINAL, PIRATERÍA PETROLERA Y CERCO TOTAL

Durante noviembre y diciembre de 2025, la ofensiva de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela ingresó en una fase cualitativamente superior. A la acumulación previa de medidas coercitivas unilaterales, operaciones mediáticas y despliegues militares se sumó un conjunto de acciones orientadas a ensayar un control directo sobre los flujos estratégicos del país, en particular sobre el comercio energético.

En noviembre, Washington profundizó su ofensiva discursiva y militar. Referentes del Partido Republicano, encabezados por Marco Rubio, reactivaron la narrativa del supuesto “Cartel de los Soles” como justificación para nuevas medidas y operaciones armadas, mientras el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe dejó un saldo de decenas de civiles muertos en ataques contra embarcaciones pesqueras acusadas, sin pruebas concluyentes, de narcotráfico.

En ese mismo período, el gobierno de Estados Unidos anunció la utilización de infraestructura estratégica en países aliados para la logística de la operación militar regional “Lanza del Sur”, encabezada por el Comando Sur norteamericano. Estas decisiones fueron denunciadas por el gobierno venezolano como parte de un libreto de desestabilización destinado a legitimar una intervención directa, en un contexto de creciente militarización del Caribe.

Frente a esta escalada, Venezuela reforzó su arquitectura de defensa integral. Se promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, se activó el Comando de Defensa de la Paz y se avanzó en la conformación de más de 145.000 Comités Bolivarianos de Base Integral, consolidando la corresponsabilidad cívico-militar-policial como eje de la defensa territorial.



En el plano internacional, las acciones estadounidenses generaron un amplio rechazo. Gobiernos de América Latina, el Caribe, África, Asia y Europa denunciaron la militarización del Caribe como una amenaza a la paz regional. Desde el G20, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió sobre los riesgos de una escalada bélica, mientras que México, Colombia, Nicaragua y Sudáfrica reafirmaron el principio de soberanía. Más de sesenta parlamentarios europeos, junto a referentes políticos y sociales, calificaron el despliegue estadounidense como un preludio de invasión.

En diciembre, la ofensiva alcanzó un nuevo umbral con la intercepción y abordaje de buques petroleros venezolanos en aguas internacionales. El 10 de diciembre, coincidiendo con una intensa operación mediática en torno a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, Estados Unidos anunció la “incautación” del buque Skipper, en las costas venezolanas. Días más tarde, fue abordado el petrolero Centuries, de bandera panameña, que transportaba crudo venezolano, pese a no encontrarse en los listados formales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

El gobierno venezolano calificó estos hechos como actos de piratería internacional y robo descarado de recursos estratégicos, advirtiendo que se trataba de un plan deliberado de despojo de las riquezas energéticas del país. La práctica se consolidó como un nuevo mecanismo de presión, que buscó imponer de facto un bloqueo marítimo y sentar precedentes para el control directo del comercio petrolero.

A mediados de diciembre, Donald Trump anunció públicamente un bloqueo total a los buques que ingresaran o salieran de Venezuela, acusando al país de apropiarse de activos estadounidenses. En respuesta, el gobierno bolivariano dispuso que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana custodiara los traslados de petróleo y reforzó los canales diplomáticos multilaterales, mientras organismos internacionales y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas alertaron sobre la existencia de un bloqueo aéreo y naval en curso.

Estas acciones, acompañadas por nuevas amenazas militares, sabotajes tecnológicos denunciados por países de la región y un incremento de ataques a embarcaciones civiles, marcaron el cierre de 2025 como un período de cerco casi total contra Venezuela. A esto, se sumó la redefinición de la Doctrina de Seguridad de Estados Unidos, a partir de la que se propuso un cambio de lógica: América Latina dejó de ser un espacio de cooperación para convertirse en una extensión directa de la seguridad interna estadounidense. El hemisferio fue redefinido como zona vital en la disputa global del siglo veintiuno. Migración, narcotráfico, energía, infraestructura y tecnología pasaron a ser considerados asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos. Esta expansión conceptual habilitó una mayor intervención en países de América Latina y el Caribe, tratados como piezas funcionales de un esquema defensivo propio.

Lejos de tratarse de episodios aislados, los hechos de noviembre y diciembre configuraron una fase preparatoria que anticipó un salto cualitativo en la estrategia de intervención directa desplegada por Estados Unidos.



ENTREVISTA DE FIN DE AÑO A NICOLÁS MADURO

Por Ignacio Ramonet

A continuación compartimos los principales puntos desarrollados en la «entrevista itinerante» realizada por el intelectual español Ignacio Ramonet al presidente Nicolás Maduro, el 31 de diciembre de 2025.

La entrevista completa puede leerse en [Nodal](#).



Entrevista al presidente de Venezuela Nicolás Maduro - Por Ignacio Ramonet

Noticias de América Latina y el Caribe

NODAL / Jan 2

- ➔ Destacó que el país ha alcanzado su segundo año consecutivo liderando el crecimiento de la economía real en América Latina y el Caribe. Basado en el reciente informe de la CEPAL que estima una expansión del 9% para el cierre de 2025, calificando este fenómeno como un "milagro económico y espiritual", fruto de la resistencia del pueblo venezolano.
- ➔ Explicó que la clave del éxito reside en los 14 Motores Productivos. "Diseñamos un plan de motores para que cada uno comenzara a andar con su propia fuerza, motores de raíz venezolana pertinentes a nuestra realidad".
- ➔ Enfatizó que Venezuela ha logrado romper con el modelo histórico rentista petrolero y que a pesar de la pérdida del 99% de los ingresos petroleros producto de las medidas coercitivas unilaterales, el país ha logrado producir sus propios alimentos. "Nosotros elegimos construir las bases para romper el rentismo y construir nuestro propio modelo", sentenció.
- ➔ Defendió la estrategia de la indexación como una fórmula exitosa y original que ha permitido proteger a los trabajadores y pensionados.
- ➔ Resaltó que esta política, combinada con el impulso al emprendimiento familiar y cooperativo, ha generado un sobrecalentamiento positivo del comercio, con un incremento del 34% en las ventas y el consumo durante el cierre de 2025.

- ➡ Puntualizó que el mercado nacional ya cuenta con 90% de productos de fabricación propia, lo que demuestra una capacidad de compra real en la familia venezolana a pesar de los constantes ataques especulativos.
- ➡ Envío un mensaje de confianza al país, asegurando que el Gobierno Bolivariano posee la experiencia y las herramientas necesarias para enfrentar cualquier agresión contra la economía.
- ➡ "Es una perturbación que sabemos cómo enfrentar, que vamos a enfrentar, y que dentro de un año verás que ya la hemos superado", sentenció.
- ➡ Enfatizó que Venezuela ha impulsado un modelo de democracia directa y protagónica nacido de la visión del Comandante Hugo Chávez en El Libro Azul.
- ➡ Informó que durante el año 2025 se realizaron cuatro consultas nacionales trimestrales, logrando la aprobación y financiamiento de 33.000 proyectos populares. "No lo aprueba un Alcalde, un Ministro o el Presidente; lo aprueba el Pueblo con su voto", sentenció.
- ➡ Destacó la robustez del Sistema Democrático Participativo del país, informando la existencia de 49.000 consejos comunales y 4.100 comunas plenamente constituidas.
- ➡ Explicó que, para optimizar la gestión de las consultas populares trimestrales, la Nación se ha organizado en 5.336 circuitos comunales que abarcan todo el territorio nacional.
- ➡ Calificó la actual confrontación política que vive el país como una guerra cognitiva que busca el control de los conceptos y las emociones. "La guerra es cognitiva porque la guerra es por el cerebro, el cerebro maneja emociones y maneja conceptos. Y para una guerra cognitiva hay que crear fuerza de conciencia, fuerza de valores, fuerza espiritual y dar la batalla con la verdad", manifestó.
- ➡ Insistió en que el principal recurso estratégico del país es la narrativa de los hechos nacionales: "Nuestra mayor arma no es un cohete nuclear, nuestra mayor arma es la verdad de Venezuela".

SECUESTRO PRESIDENCIAL Y RUPTURA ABIERTA DEL ORDEN INTERNACIONAL

En la madrugada del 3 de enero de 2026, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció la ejecución de un ataque militar directo de Estados Unidos sobre su territorio continental. La acción incluyó ataques aéreos sobre Caracas y sobre zonas estratégicas de los estados Miranda, La Guaira y Aragua, y tuvo como objetivo -según la información oficial difundida por Caracas- el secuestro y traslado forzado del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera combatiente, diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores.

Más de 150 aeronaves participaron de la invasión que neutralizó los sistemas de radar del país. En ese momento, el presidente Maduro se encontraba descansando en su residencia. Fuerzas especiales irrumpieron violentamente en el lugar, hiriendo a Cilia Flores y provocando más de cien víctimas fatales, entre civiles y efectivos militares, incluidos 32 guardias de origen cubano.

Conviene despejar una trampa desde el inicio. Reducir los hechos de la madrugada del 3 de enero a una “operación quirúrgica” no es un error analítico inocente: es aceptar el encuadre narrativo de la guerra psicológica del agresor.

Cuando Donald Trump anunció, en enero de 2025, que el Golfo de México debía redefinirse como “Golfo de América”, no realizó sólo un gesto retórico. Esa idea explicitó un giro estratégico en la política hemisférica. Ese anuncio funcionó como acto fundacional de una nueva etapa de militarización del Mar Caribe, entendida como espacio propio de dominación estadounidense. El primer paso fue la reapropiación de facto del Canal de Panamá, en abierta violación del espíritu de los Tratados Torrijos-Carter, y el preludio de una escalada mayor, que terminó de cristalizarse como toda una declaración de guerra sobre Venezuela y en la decisión de imponer por la fuerza un reordenamiento político y territorial de la región.

En el marco de esta guerra, lo de Caracas tuvo las características propias de un combate militar, breve y concentrado en el tiempo, pero de alta intensidad. Los reportes coinciden en describir un dispositivo masivo, con claro predominio aéreo, empleo de helicópteros y ataques coordinados sobre múltiples objetivos. Las reconstrucciones hablan de más de 150 aeronaves involucradas, lanzadas desde 20 lugares diferentes en el hemisferio occidental, y de golpes simultáneos contra instalaciones militares y puntos estratégicos, en una secuencia planificada para saturar la capacidad de respuesta del Estado venezolano (The Whashington Post, 3/01/2026).

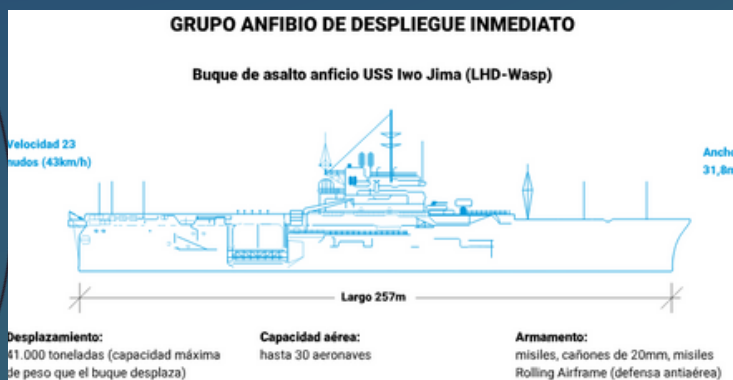


El uso de aviones de guerra electrónica EA-18G Growler (una adaptación del avión de caza polivalente F/A-18 Super Hornet) indica la decisión de dominar el espectro electromagnético del teatro de operaciones: interferir radares, bloquear comunicaciones, cegar sistemas de defensa aérea y garantizar corredores seguros para fuerzas de asalto.

En el siglo XXI, la guerra ya no es solo fuego y maniobra. Es control de información, señales y percepción. En la nueva fase capitalista el control del espectro electromagnético se ha convertido en aquello que termina otorgando la superioridad militar en el teatro de operaciones.

Es así que pueden funcionar los helicópteros de operaciones especiales, compatibles con plataformas embarcadas como el buque de asalto anfibio *USS Iwo Jima*, asignados a la 160th SOAR "Night Stalkers" de la aviación del Ejército, una unidad diseñada para infiltrar fuerzas de elite en entornos hostiles, de noche y a baja altura.

En ese marco, la presencia de unidades poderosas y conocidas como la *Delta Force* termina de cerrar el trazo grueso del nivel operacional. Se trata de fuerzas de acción directa, entrenadas para la captura o neutralización de objetivos de alto valor, que operan bajo lógica de combate real y no de "operación policial internacional"



Planos del USS Iwo Jima, desde donde despegaron los más de 20 helicópteros de la 160th SOAR "Night Stalkers" de la aviación del Ejército estadounidense, responsables de los bombardeos y de colocar en terreno a la Delta Force, tropa de élite especializada en guerras de asalto. Fuente: La Nación.

<https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/como-es-el-uss-iwo-jima-el-buque-que-traslado-a-nicolas-maduro-y-su-esposa-cilia-flores-a-eeuu-nid03012026/>

Pocas horas después de los ataques, Trump confirmó públicamente la operación, en una conferencia de prensa junto al jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio y el Jefe del Departamento de Guerra, Peter Hegseth. Allí aseveró que la operación había tenido como finalidad el secuestro del Presidente bolivariano y que Estados Unidos estaría encargado, a partir del momento, de un proceso de transición tutelada en Venezuela, que implicaría la “recuperación” de la infraestructura petrolífera, mediante la inversión de las corporaciones. También desestimó la posibilidad de que fuera María Corina Machado, la encargada de administrar el país, afirmando que carecía del respeto y el respaldo necesario para hacerlo. Confirmó que tenían todo dispuesto para un segundo ataque, aunque no lo consideraran necesario y lanzó advertencias hacia otros funcionarios bolivarianos e incluso hacia los gobiernos de Cuba y de Colombia. Hegseth confirmó que la operación había sido planeada durante meses y Marco Rubio, ante una pregunta de una periodista, admitió que la decisión sobre el ataque no había sido sometida al Congreso estadounidense, en donde el bloque demócrata se ha manifestado en contra de las operaciones que se fueron desarrollando sobre Venezuela. La acción fue justificada por el Jefe del Departamento de Estado, como parte de una política de resguardo de la seguridad interior de EEUU, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Trump afirmó además que los gobiernos anteriores habían descuidado la Doctrina Monroe y enmarcó sus acciones en lo que denominó “Doctrina Donroe”.

Posteriormente, funcionarios del Departamento de Justicia informaron sobre la imputación de Maduro y Flores ante tribunales neoyorkinos, consolidando una estrategia de judicialización extraterritorial que el gobierno venezolano y diversos analistas han denunciado de manera sistemática.



La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, designada hacia el final del día por el Tribunal Supremo de Justicia como la presidenta encargada, denunció la operación como una agresión militar sin precedentes, exigió prueba de vida del Jefe de Estado y advirtió que el objetivo central de la intervención fue desarticular por la fuerza al Estado venezolano y quebrar su institucionalidad. En el mismo sentido, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó la activación del estado de Conmoción Exterior y de los protocolos de defensa integral.

Por su parte, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, emitió un mensaje en Venezolana de Televisión (VTV) repudiando el ataque y pidió confiar en el liderazgo, en la dirigencia del Mando Político y Militar de la Revolución, y no caer en facilitarle las cosas "al enemigo invasor". Señaló que las bombas cayeron en lugares habitados por civiles y llamó a las organizaciones internacionales a condenar el ataque, advirtiendo que su silencio implicaría complicidad en el "asesinato de civiles". Aseguró que "Venezuela sabe que ha sido agredida, nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer" y "¡Al final de esta batalla, el pueblo de Venezuela saldrá victorioso y nosotros venceremos!".

La respuesta popular no se hizo esperar. El pueblo venezolano salió masivamente a las calles y plazas a exigir por la libertad del Presidente y la primera combatiente. Caracas, Maracaibo y decenas de ciudades se llenaron de consignas exigiendo el retorno de Maduro y Flores, por la soberanía, la paz y la autodeterminación, rechazando la intervención extranjera. Se activó la defensa integral de la nación: milicias, organizaciones comunitarias y estructuras populares comenzaron a organizar la protección del territorio.

Las manifestaciones en rechazo al ataque imperial se extendieron hacia diferentes ciudades de la región en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y el mundo. Desde Nueva York, Londres, París, Berlín y Barcelona, entre otras ciudades, se repudió el injerencismo.

En declaraciones posteriores, Trump anunció que Estados Unidos avanzaría en la conformación de una administración transitoria y en la protección de los activos estratégicos venezolanos, en particular los vinculados al sector energético. Estas afirmaciones exponen abiertamente que el ataque no respondió a criterios judiciales ni de seguridad, sino a una estrategia de control político, económico y territorial, en un contexto de disputa geopolítica global por recursos estratégicos.

En el plano internacional, el canciller Yván Gil informó la presentación de una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y solicitó una reunión urgente para abordar lo que calificó como una agresión armada contra un Estado soberano. Diversos gobiernos y espacios multilaterales expresaron su preocupación por el impacto regional de los hechos y advirtieron sobre el riesgo que esta ruptura del orden jurídico internacional representa para el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Las reacciones de una multiplicidad de actores en el mundo no tardaron en comunicarse por medios oficiales, de comunicación y redes sociales.

PRONUNCIAMIENTOS



EN CONTRA DE LA AGRESIÓN

Condenaron y repudiaron el ataque de EE.UU. a Venezuela y el secuestro del Presidente:

Claudia Sheinbaum (México),

Lula da Silva (Brasil),

Gustavo Petro (Colombia),

Miguel Díaz-Canel (Cuba),

Evo Morales (Bolivia),

Gabriel Boric (Chile),

Yamandú Orsi (Uruguay),

Xiomara Castro (Honduras)

Cristina Fernández de Kirchner
(Argentina)

Kamala Harris (Ex vicepresidenta de EEUU) y representantes demócratas en el Congreso de EEUU.

Gobierno de: **Nicaragua**,

Rusia, China, Irán, India, Indonesia,

Turquía, Sudáfrica y Argelia.

Organismos como: el **ALBA-TCP, CELAC, Movimiento de Países No Alineados**, el **MERCOSUR** y **Naciones Unidas**.



A FAVOR DE LA AGRESIÓN

Apoyaron o celebraron el ataque a Venezuela y el secuestro del Presidente:

Javier Milei (Argentina),

Daniel Noboa (Ecuador),

Nayib Bukele (El Salvador),

José Raúl Mulino (Panamá),

Rodrigo Paz Pereira (Bolivia),

José Jeri (Perú),

Santiago Peña (Paraguay)

Antonio Kast (Chile).

María Corina Machado,

Edmundo González (PUD Venezuela)

Marco Rubio, Pete Hegseth
(Sector republicano de EEUU)

Benjamín Netanyahu
(primer ministro de Israel)

Emmanuel Macron
(presidente de Francia)

Georgia Meloni
(Primera Ministra de Italia)

La Unión Europea y países como España, Alemania, Portugal y Bélgica pidieron respeto al derecho internacional, pero no condenaron el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El domingo 4 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presidió el Consejo de Ministros número 757, demostrando la operatividad plena del aparato estatal venezolano. La sesión ministerial, contó con la participación de los vicepresidentes sectoriales y ministros de áreas estratégicas, significando la estabilidad y gobernabilidad frente a la agresión externa.

El lunes 5 de enero se instaló la nueva Asamblea Nacional surgida de los comicios del pasado 5 de mayo de 2025, ante la que Delcy Rodríguez presentó juramento. El nombrado presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, destacó la banca vacía de Cilia Flores y reiteró el pedido de su restitución y la de Nicolás Maduro, secuestrados el 3 de enero tras los ataques. También se rindió homenaje a los caídos en combate. Finalmente, las Fuerzas Armadas ofrecieron honores a la presidenta encargada de manera interina, hasta el retorno de Maduro.

Estas acciones mostraron mostraron la vigencia del hilo constitucional y la capacidad del poder político para rearticularse.

Mientras tanto el presidente constitucional compareció ante la Corte de Nueva York,, rechazó los cargos que imponen en su contra y declaró: "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas". "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país".

En las fotos de su detención, que se hicieron públicas, envió señales de fortaleza a su pueblo. La seña de los dedos en V con la otra mano subrayando se convirtió rápidamente en un símbolo de fortaleza de la Revolución Bolivariana.



PALABRAS FINALES

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LAS POTENCIALIDADES DEL PROCESO ANTIIMPERIALISTA BOLIVARIANO

Los acontecimientos que atravesaron a la República Bolivariana de Venezuela durante 2025 y que culminaron, en enero de 2026, con la intervención militar directa de Estados Unidos y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, no solo marcan una ruptura del orden jurídico internacional vigente. Expresan, en un sentido más profundo, el choque entre dos proyectos históricos antagónicos en el marco de la transición hacia una nueva fase del capitalismo global.

El Socialismo del Siglo XXI, lejos de constituir una experiencia meramente nacional o un modelo cerrado, expresa una tentativa histórica de recomposición del poder popular frente a las transformaciones estructurales del capitalismo. Su núcleo no reside únicamente en la redistribución material, sino en la disputa por el control político del territorio, de los recursos estratégicos, de la producción de valor y, de manera creciente, de los sentidos, los saberes y las formas de organización social en un mundo atravesado por la mercantilización y digitalización de la vida.

En la fase digital del capitalismo, caracterizada por la centralidad de las plataformas tecnológicas, la financiarización extrema, la subordinación algorítmica de la vida social, el imperialismo ya no opera exclusivamente mediante la ocupación territorial clásica. Se despliega como una arquitectura compleja de dominación que articula medidas coercitivas unilaterales, control financiero, guerra cognitiva, judicialización extraterritorial y, cuando estas herramientas resultan insuficientes, intervención militar directa. Es en este escenario donde el proceso bolivariano adquiere una densidad estratégica singular.



Venezuela encarna una “anomalía” persistente para el orden imperial contemporáneo. No solo por la magnitud de sus recursos energéticos y minerales, sino porque ha logrado sostener, incluso bajo condiciones extremas de asedio, una experiencia de reorganización política basada en la democracia participativa, el poder comunal y la articulación cívico-militar-policial como forma de defensa integral del Estado y del territorio. Esta configuración desafía directamente el paradigma liberal-tecnocrático que busca reducir la política a gestión, y a los pueblos a poblaciones administradas.

El Socialismo del Siglo XXI expresa, en este sentido, una apuesta contrahegemónica que disputa el sentido mismo de la modernidad. Frente a un capitalismo digital que promete eficiencia, innovación y conectividad mientras profundiza la desigualdad, la precarización y la desposesión, el proyecto bolivariano afirma la centralidad del pueblo organizado como sujeto político, la planificación democrática de la economía y el control soberano de los bienes comunes. No se trata de una negación de la tecnología, sino de la disputa por su orientación social, política y ética.

La violencia desatada contra Venezuela revela, paradójicamente, las potencialidades del proceso antiimperialista en curso. La agresión no responde a una debilidad del proyecto, sino a su capacidad de irradiar alternativas en un contexto de crisis sistémica. En un mundo marcado por la descomposición de las democracias liberales subordinadas a la gobernanza global de la Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica, el avance del neofascismo y la concentración obscena del poder en esa ínfima porción de la sociedad, la experiencia venezolana funciona como un laboratorio político que demuestra que es posible sostener márgenes de autodeterminación incluso en condiciones de guerra multidimensional.

Los grados de fortaleza, el apoyo popular y las dificultades para romper la Unión Cívico Militar y Policial sobre la que se ha sostenido el proceso revolucionario en Venezuela; más la falta de asidero y la pérdida de credibilidad que fue experimentando el sector de la oposición aglutinado en María Corina Machado, obligó a la inteligencia estadounidense a realizar evaluaciones profundas, para diseñar su estrategia de intervención.

Según un artículo del New York Times (06/01/2026), la decisión de Donald Trump de no imponer a María Corina Machado se fundamentó en una evaluación de riesgos y la percepción de la inviabilidad política de Machado.



Altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, entendieron que respaldar a la oposición en tal escenario podría haber requerido una "presencia militar más sólida" en el país, una opinión respaldada por un análisis clasificado de la CIA. Además, existía frustración entre los funcionarios por las evaluaciones "inexactas" de Machado sobre la fortaleza de Maduro y escepticismo sobre su capacidad real para tomar el poder.

La rigidez de su estrategia -rechazando cualquier contacto con el Gobierno de Maduro y el apoyo inequívoco a las medidas coercitivas unilaterales- había alienado a la élite empresarial venezolana y a figuras clave en el entorno de Trump, limitando su capacidad para construir una coalición amplia. De hecho, cuando el enviado de Trump, Richard Grenell, solicitó un plan concreto para la sucesión (Edmundo González) y una lista de presos políticos, Machado y su equipo ignoraron o eludieron estas peticiones, lo que llevó a Grenell a frustrarse por la falta de ideas concretas sobre cómo materializar un gobierno viable.

En su lugar, el gobierno norteamericano se vió obligado a reconocer la continuidad política de mando, en Delcy Rodríguez.

América Latina y el Caribe están frente a un dilema de época. Lo que está en juego no es sólo Venezuela. La acción contra el gobierno venezolano, planificada durante meses según reconstrucciones periodísticas y fuentes oficiales estadounidenses, instala un precedente de enorme gravedad: un "cambio de régimen" ejecutado sin siquiera el pudor de la coartada multilateral y con el control del petróleo venezolano como telón de fondo explícito. No se trata de un exceso ni de un desvío, sino de una decisión estratégica que reordena el tablero regional.



El golpe sobre Maduro decreta el fin de América Latina como Zona de Paz. No porque la región haya estado exenta de violencia, sino porque se habilita algo cualitativamente distinto: la normalización de la agresión directa como instrumento de “gobierno hemisférico”. Se abre una etapa probablemente muy oscura, y el paralelo histórico que se impone por su función disciplinadora continental es 1973: la caída de Salvador Allende como mensaje para toda la región y como punto de partida del Plan Cóndor. Hoy el mensaje es brutalmente claro; si no alcanza el bloqueo económico, habrá guerra.

En tal sentido, queda expuesta la fortaleza del gobierno bolivariano. Resulta innegable que el proceso bolivariano se erige como el epicentro de la lucha mundial antifascista, no solo por el recrudecimiento de la ofensiva contra su pueblo y el gobierno legítimamente electo del Presidente Nicolás Maduro, sino también por haber asumido la iniciativa de conformarse como un centro político donde gravitan y se articulan las luchas antiimperialistas y antifascistas de las organizaciones a nivel mundial.

El año 2025 y el inicio de 2026 inscriben a Venezuela en el centro de esta disputa. No como excepción, sino como síntesis. Lo que allí se dirime no es solo el destino de un país, sino el alcance y los límites de la dominación imperial en el siglo XXI y la viabilidad de proyectos emancipatorios en un mundo en transición. En ese sentido, la experiencia bolivariana continúa interpelando a América Latina y al Sur Global, recordando que, incluso en los escenarios más adversos, la historia sigue abierta.



Mg. Paula Giménez
Directora de NODAL

Mg. Lucas Aguilera
Coordinador de investigación

Elisa García
Editora

Solange Martínez
Coordinadora Anuario América Latina y el Caribe 2025

Jimena Montoya | Luciana Jouli | Maximiliano Londero
Coordinadores de Redacción

Alfio Finola | Noelia Naranjo | Carolina Sturniolo | Bruno Ceschin
| Diego Lorca | Seyla Riera Bauer | Luz Eggel
Redactores

@InfoNodal



Noticias de América Latina y el Caribe